

NUMERO 78

ENERO 31 DE 1935

78.ª REUNION — Continuación de la 15.ª SESION EXTRAORDINARIA

Presidencia del doctor JULIO A. ROCA.

Vicepresidente de la Nación

Ministro presente: de Hacienda, doctor Federico Pinedo;

Senadores presentes: Alberto Arancibia Rodríguez, Mario Arenas, Carlos A. Bruchmann, Rudecindo S. Campos, Ramón S. Castillo, Raúl Ceballos Reyes, Francisco R. Galíndez, Laureano Landaburu, Lucio López Peña, Juan José Lubary, Pío Montenegro, Alfredo L. Palacios, Robustiano Patrón Costas, Carlos R. Porto, Guillermo Rothe, Matías G. Sánchez Sorondo, Antonio Santamarina, Cruz Vera, Juan R. Vidal.

Senadores ausentes, con aviso: Mario Bravo, Aldo Cantoni, Francisco E. Correa, Atanasio Eguiguren, Eduardo Laurencena, José Nicolás Matienzo, Carlos Serrey, Lisandro de la Torre, Horacio Vera Ocampo, Benjamín Villafañe.

Senador ausente, sin aviso: Mariano P. Ceballos.

SUMARIO

- 1.—Continúa la consideración, en particular, del despacho de la Comisión de Hacienda, en los proyectos del Poder Ejecutivo sobre Banco Central, ley de Bancos, Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias, modificando las leyes de los bancos oficiales, y ley de organización. Se aprueban.

—En Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de Enero de 1935, siendo la hora 16 y 10 minutos, dice el:

1

BANCO CENTRAL

Sr. Presidente. — Continúa la sesión con la consideración, en particular, del despacho de la Comisión de Hacienda.

—Se lee el artículo 2º del proyecto de ley de creación del Banco Central. (1)

(1) Los proyectos *in extenso* aparecieron en la reunión número 76, del 29 del corriente mes.

**Sr. Presidente.** — Está en consideración. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

—Se vota y resulta afirmativa.

**Sr. Bruchmann.** — Pido la palabra.

Hago indicación para que todo artículo que no fuere discutido ni observado, se dé por aprobado.

—Asentimiento.

**Sr. Presidente.** — Habiendo asentimiento, así se hará.

—Se leen y aprueban, sin observación, los artículos 3º a 53, inclusive.

—Se lee el artículo 54.

**Sr. Sánchez Sorondo.** — Pido la palabra.

El artículo que acaba de leerse ha modificado el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, en el sentido de conservar para el Congreso nacional la libertad de alterar, cuando él lo considere conveniente, las cláusulas de esta ley, en tanto no se refiriesen a las relaciones del Banco Central con los bancos accionistas.

El señor senador por Mendoza, al informar en general y el señor ministro de Hacienda, en su discurso de ayer, se refirieron especialmente a las razones que la comisión había tenido para redactar el artículo en la forma que hoy viene a la discusión; pero, en el laudable deseo de mantener las prerrogativas del Estado, quizás la redacción que ahora se le da, podría ocasionar algunos inconvenientes que se refiriesen a sanciones que afectasen las operaciones bancarias y un tanto la autonomía de esta institución.

Por ello, señor presidente, me permito proponer la siguiente modificación, que solicito sea aceptada por la Comisión de Hacienda y por el señor ministro. La redacción que proyecto sería ésta: «Durante el término que fija el artículo 1º, las relaciones que esta ley establece entre el Banco Central y los bancos, las disposiciones referentes a los préstamos directos o indirectos a los gobiernos y la composición del directorio y de las asambleas no podrán ser modificadas sin la aprobación de los bancos accionistas, dada en una asamblea extraordinaria convocada expresamente al efecto.»

Con esta redacción quedarían a cubierto los

peligros que pudiesen presentarse de una intromisión exagerada del Estado en las actividades del Banco, como la historia de nuestros bancos oficiales nos ofrece abundantes ejemplos.

Desde este punto de vista, me parece que quedarían salvados los escrúpulos que ha tenido la Comisión de Hacienda al reservar a los poderes públicos su intervención en la modificación de este estatuto, y la defensa de la autonomía financiera del Banco Central.

**Sr. Arenas.** — Pido la palabra.

La comisión no tiene inconveniente en aceptar esta modificación, que precisa un poco más el concepto, dentro del espíritu que guió la modificación que se había hecho.

**Sr. Ministro de Hacienda.** — El Poder Ejecutivo acepta también la enmienda.

—Se lee la modificación propuesta por el señor senador por Buenos Aires.

**Sr. Presidente.** — Se va a votar.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Sin observación, se votan y aprueban los artículos 55 al 61, inclusive.

**Sr. Presidente.** — Queda aprobado el proyecto.

#### Ley de bancos

—Se lee el artículo 1º.

**Sr. Presidente.** — En discusión.

**Sr. Arancibia Rodríguez.** — Pido la palabra.

Este artículo, con el cual estoy completamente de acuerdo en lo referente a su aspecto financiero, envuelve una interesante cuestión de derecho federal, porque se relaciona directamente con las facultades concurrentes entre la Nación y las provincias en materia de bancos, y envuelve, también, una cuestión de derecho común, porque deroga las facultades concedidas por las leyes de fondo a las provincias para la autorización del funcionamiento de personas jurídicas.

La Nación tiene el derecho de fundar bancos de Estado en virtud de la cláusula del artículo 67, inciso 5º de la Constitución, e idéntica facultad tienen las provincias en virtud de los artículos 107 y 108; sólo les está vedado a las provincias fundar bancos que emitan moneda, y esto mismo pueden hacerlo, con autorización del Congreso.

Se trata, pues, de un caso típico de las facultades concurrentes entre la Nación y las provincias, que pueden ejercitarse separadamente sin consentimiento del uno para el otro. El Banco del Estado nacional que la Constitución autoriza, es una institución pública con facultades y fines esencialmente gubernativos y administrativos, si bien tiene subsidiariamente también fines comerciales, pero nunca llega a ser exclusivamente casa de comercio. El Banco de Estado provincial responde a los mismos fines institucionales y políticos que el Banco de Estado de la Nación.

Esta ley, como se acaba de ver, establece que las provincias no podrán fundar bancos de Estado sin previa autorización del Poder Ejecutivo de la Nación, lo que importa, a mi juicio, que la facultad concurrente de las provincias, desaparece para dar paso a una cláusula de una ley especial del Congreso, que la suprime o la subordina con este articulado a la autorización previa del Poder Ejecutivo, que indudablemente debe ser el Poder Ejecutivo nacional puesto que se trata de una ley nacional.

En la Nación Argentina hay quince poderes ejecutivos, que hasta la vigencia de esta ley pueden crear bancos de Estado y autorizar el funcionamiento de toda clase de bancos particulares.

Esta facultad puede ser concentrada en el Poder Ejecutivo nacional para los bancos particulares, pero no para los bancos oficiales de las provincias.

A mayor abundamiento, y para explicar bien las dudas que me sugiere la cláusula que acaba de leerse, voy a citar a los señores senadores, en apoyo de mi opinión, un párrafo muy adecuado para el caso que este artículo plantea, del doctor Manuel Augusto Montes de Oca, en su *Tratado de Derecho Constitucional*, que dice así: «Está sentado que el Congreso puede fundar y reglamentar el Banco de la Nación en la Capital y sucursales de las provincias, con poder de emitir billetes, pero como los Constituyentes creyeron, y con justo motivo, que era factible que las necesidades del país exigieran la fundación de bancos locales con carácter oficial, la legislaron como facultad concurrente del Poder Central y de los poderes de Estado locales.»

Yo deseo conocer la opinión de la comisión respecto de esta facultad concurrente de las provincias cuya existencia dejo establecida, si se sanciona la autorización previa que esta ley

exige para fundar toda clase de bancos en todo el territorio de la República.

**Sr. Arenas.** — Pido la palabra.

Si bien la frase «sin previa autorización del Poder Ejecutivo» parece indicar que se pone en manos de éste la facultad de autorizar o no la creación de esos bancos, la última parte del artículo explica suficientemente el concepto, y lo voy a leer para mejor interpretación de los señores senadores. Dice «sin previa autorización del Poder Ejecutivo, que sólo la concederá después de oír al Banco Central y verificar que se ha cumplido con las condiciones de la presente ley y las prescripciones previstas por la ley de creación del Banco Central». Vale decir que no se sujeta a la autorización del Poder Ejecutivo, sino en razón directa con la necesidad de que se cumplan las condiciones que establece esta ley.

No se discute, entonces, en el caso constitucional que plantea el señor senador por San Luis, las facultades concurrentes de las provincias con el gobierno nacional, de fundar bancos. Lo único que se exige es que esos bancos se sujeten a las prescripciones especiales de la ley de bancos.

Se ha dicho, al informar el despacho en general, que los bancos funcionan sin ley orgánica, lo que es un peligro, porque casi todas sus disponibilidades están formadas por los depósitos del público. Por eso, esta ley exige que ajusten sus operaciones al mecanismo de ella, en atención a una conveniencia, que es una garantía de orden público.

Con este criterio, la comisión entiende que todos los bancos de la República deben quedar sujetos a las disposiciones de esta ley, y en lo que se refiere a los bancos de las provincias, la autorización que se exige no es con el propósito de trabar la facultad constitucional que tienen para fundar esos bancos, sino simplemente para verificar que su organización se ajuste a las formalidades que esta ley exige.

Podría suceder que estas facultades concurrentes puedan interpretarse de diverso modo por el Poder Central y las provincias. Planteado el asunto en estos términos, no lo va a resolver ni la discusión a propósito de esta ley, ni la disposición de la ley general de bancos que se está sancionando; será una cuestión que dilucidarán los tribunales resolviéndola en definitiva de acuerdo a principios constitucionales ajenos a esta cuestión.

No es la facultad, sino la forma de ejerci-

tarla; y en esto se sigue el principio que la misma Constitución establece, de que las leyes nacionales reglamentan los derechos, facultades y atribuciones que la Constitución otorga; y si bien ese principio se refiere al título de las garantías de orden individual, puede y debe aplicarse como regla analógica a todo el texto de la Constitución.

De manera que, en definitiva, entiendo: que la autorización que preste el Poder Ejecutivo para que funcionen los bancos de acuerdo a este artículo, no implica atribuir la facultad de negar la autorización, sino que el Poder Ejecutivo, en los casos concernientes a las provincias, sirve de intermediario, porque es el que está en relación constitucional con ellas, y es por sus oficios que debe pasar al Banco Central, el pedido de inspección del Banco de provincia, para que aquél examine si ese Banco se sujeta a la ley y a sus principios.

**Sr. Sánchez Sorondo.** — Pido la palabra.

La cuestión constitucional que plantea el señor senador por San Luis, es evidente. Cuando yo estudié esta ley, entendí que ella no se refería a los bancos que las provincias, en uso de atribuciones expresas de la Constitución, podían establecer.

**Sr. Arenas.** — ¿Me permite una interrupción? Debo advertir al señor senador que en ese caso el conflicto sería mucho peor. Comprendiendo a los bancos provinciales, éstos podrían fundarse y desarrollar una vida normal, pero si ellos quedaran excluidos, entonces estarían en una difícil situación para competir con otros, porque no gozarían de ninguna de las ventajas que se establecen en esta legislación.

**Sr. Arancibia Rodríguez.** — Esa es otra cuestión; estamos tratando la cuestión constitucional para amoldarla a las disposiciones de esta ley.

**Sr. Sánchez Sorondo.** — Decía, señor presidente, que la cuestión planteada por el señor senador por San Luis, era evidente y clara. Las provincias tienen derecho, por la Constitución, a fundar, sin autorización del Congreso, bancos que no emitan moneda, y de fundar bancos que emitan, con la autorización del mismo. De manera que una ley que viniera a privar a las provincias de esta facultad sería inconstitucional.

Por eso yo decía que cuando estudié este artículo, entendí que estaban fuera de su alcance los bancos oficiales que las provincias

fundaran, en virtud de las disposiciones expresas de la Constitución. No está en nuestras manos, pues, modificar esto; tenemos que aceptar la legislación vigente y amoldar las disposiciones de este proyecto a lo que la Constitución establece.

Pero debo agregar que, si bien la cuestión es constitucional, no es práctica, es decir, que no tendría resultados prácticos. Las provincias que hayan fundado bancos de Estado o las provincias que quieran hacer uso de la facultad constitucional de fundar bancos, por el imperio de las circunstancias, por el imperio de necesidades superiores, tendrán que entrar en el engranaje del Banco Central, realizando los procedimientos y tramitaciones adecuados. Por eso, señor presidente, se me ocurre, ya que el señor senador por San Luis plantea esta cuestión, que ella podría obviarse simplemente con colocar frente a este artículo una frase que dijera: «Salvo lo dispuesto en el artículo 108 de la Constitución».

**Sr. Ministro de Hacienda.** — El derecho acordado a las provincias de fundar bancos, deriva de la interpretación a contrario de una disposición que les prohíbe fundar bancos de emisión, a no ser que lo consienta el Congreso nacional. El alcance de la disposición es muy fácilmente perceptible. Los Constituyentes previeron que el Congreso nacional crearía el Banco de emisión nacional y que se concedería a ese Banco nacional el privilegio de emisión en todo el territorio del país, quedando entonces excluida la posibilidad de que las provincias establecieran instituciones semejantes. Si la Nación no hace uso de ese derecho, como si la Nación no hace uso del derecho de dictar un código civil, las provincias pueden crear su Banco emisor, como las provincias pueden darse su código civil; pero dictada la ley nacional creando el Banco nacional de emisión, o aprobando el código civil, las provincias no podrán entonces crear su Banco de emisión ni dictar su código civil. Sin embargo, admito que la disposición prohibitiva del establecimiento de un Banco de emisión, a no ser que la Nación lo consienta, puede interpretarse a contrario como el reconocimiento formal del derecho de las provincias a crear bancos que no sean de emisión, bancos de Estado.

Esa interpretación a contrario tiene también sus graduaciones, en cuanto a la interpretación de que son susceptibles. Podría admitirse, por ejemplo, sin una concentración de la legislación civil y comercial de la Nación, si la

Nación no hubiera hecho uso del derecho de dictarla, que las provincias no sólo pudieran crear sus propios bancos de Estado, sino que pudieran dictar una legislación estadual, estableciendo los requisitos a que se someterían las personas o entidades que quisieran, dentro de sus límites, funcionar como banqueros, es decir, que la disposición constitucional permitiría dos cosas: crear el Banco de Estado provincial, y autorizar dentro de la jurisdicción provincial el funcionamiento de bancos comunes.

Esta última atribución es evidente que la podemos hacer nosotros desaparecer para las provincias, al centralizar en la Nación la legislación bancaria que es parte de la materia comercial, estableciendo una ley para todo el territorio del país. Es lo que se hace, y sobre eso no hay discusión.

**Sr. Arancibia Rodríguez.** — No hay discusión. Esa es una facultad indiscutible.

**Sr. Ministro de Hacienda.** — Quedaría un punto, únicamente: el derecho que pueden tener las provincias de crear sus bancos de Estado sin sujeción a las leyes establecidas para todo el país, fijando las condiciones y requisitos que deben reunir los bancos.

**Sr. Arancibia Rodríguez.** — No es esa la cuestión. No es sin sujeción; es sin autorización previa. Creo que deben estar sometidas a la legislación general.

**Sr. Ministro de Hacienda.** — Ya no estoy seguro de que puedan las provincias, en virtud de la interpretación a contrario de la cláusula citada, autorizar el funcionamiento de bancos provinciales de Estado, que no tengan todas las características y todos los requisitos exigidos por la ley nacional de bancos, en cuanto el negocio bancario es un negocio con carácter comercial que puede estar reglado por la ley nacional y que debe aplicarse a todas las instituciones, sean particulares o de Estado.

Por lo demás, me parece a mí evidente una consideración que hoy ha hecho el señor senador por Buenos Aires. Suponiendo que una provincia creara un Banco sin someterse a los procedimientos fijados por la ley nacional para el establecimiento de un instituto de esta naturaleza, ese Banco quedaría absolutamente aparte del sistema bancario argentino. Podría el Banco Central negarse a admitirle en el «clearing», podría negarse a admitir su papel, como si viniera sin firma bancaria, por estar endosado por un organismo que no forma parte del sistema bancario argentino; podría negarse a reconocer como operaciones de redes-

cuento, aquellas en que hubiera intervenido esa institución de crédito oficial del Estado. Ese Banco, en resumen, aparecería en una situación de notoria inferioridad comparado con los bancos del sistema nacional.

**Sr. Arancibia Rodríguez.** — Por eso es que no es necesario someterlos imponiéndoles inconstitucionalmente lo que de seguro aceptarían voluntariamente.

**Sr. Ministro de Hacienda.** — No obstante eso, las provincias pueden, por actos de gobierno, crear su Banco y si lo crean, si se empeñan en crearlo, sin someterlo a los requisitos de la ley nacional, es evidente que no puede el Banco Central ir a cerrar en el territorio de la provincia un organismo que la provincia haya creado como un rodaje administrativo provincial. Pero ese Banco va a tener que subordinar su funcionamiento a un organismo administrativo, que nace de la potestad administrativa y policial del gobierno local en su propio territorio.

Con todo, como no tengo el más mínimo deseo de que esta ley aparezca cercenando derechos provinciales o monopolizando para la Nación derechos que hoy son de la Nación y de las provincias, comprendería que se dijera, no todo lo que propone el señor senador por Buenos Aires, sino estas palabras: «La autorización del Poder Ejecutivo no se necesitará para el funcionamiento de bancos de Estado provinciales». Pero todo lo demás estaría subordinado a la legislación bancaria establecida por esta ley.

**Sr. Arancibia Rodríguez.** — Estamos completamente de acuerdo. Sostengo que la legislación nacional sobre bancos puede regir en toda la República y que el control debe estar sometido exclusivamente al poder de la Nación. Yo tengo fundado ante el Senado un proyecto sobre seguros donde se adoptan los mismos principios que acaba de enunciar el señor ministro, pero lo que no puede aceptarse es la autorización previa para la existencia de instituciones que la Constitución ha creado y autoriza por sí sola.

De manera que, salvo esa dificultad, estamos completamente de acuerdo en que debe regir la ley en toda la República y en que será imposible la existencia de un Banco de Estado que no se acoja a los beneficios de esta ley.

Ya he dicho que esas son razones para confirmar la inconveniencia de una disposición que prácticamente no se necesita.

**Sr. Ministro de Hacienda.** — No, se necesita para todo lo demás.

**Sr. Arancibia Rodríguez.** — Ahora, una salvedad más a lo expuesto por el señor ministro. La facultad de las provincias para crear bancos, no solamente surge «a contrario sensu» del artículo 108 sino también porque las provincias tienen todos los poderes que expresamente no han delegado a la Nación. La Nación no tiene más que las que se le han conferido.

**Sr. Ministro de Hacienda.** — Pero si la legislación bancaria es comercial, está delegada.

**Sr. Arancibia Rodríguez.** — Evidentemente, por eso hubiera sido mucho mejor, en vez de esta ley especial, intercalar esta legislación de bancos en un título del Código de Comercio.

Pero ni aun este código podría confundir, en todo, a los bancos de Estado con los bancos particulares.

Pero no quiero insistir más al respecto y salvada mi opinión, creo haber salvado, también, la buena doctrina de la Constitución.

**Sr. Sánchez Sorondo.** — Pido la palabra.

Desde luego, yo no tengo preferencias por ninguna redacción, siempre que lo que se sancione salve la situación constitucional que acaba de plantearse, ya sea la fórmula que yo he propuesto o la que ha propuesto el señor ministro.

Pero insisto, señor presidente, en que la cuestión tiene su importancia, aunque sea teórica, y que es bueno que en estas palabras que se cambian entre los senadores y el ministro quede fijado claramente el criterio que se va a adoptar a este respecto.

Como acaba de decir el señor senador por San Luis, no es solamente una interpretación «a contrario sensu» la que autoriza a las provincias a crear bancos por sí, siempre que estos bancos no emitan, y, desde luego, con la aprobación del Congreso, pueden erigir bancos con facultad de emitir billetes. Está el artículo 104 que acaba de recordar el señor senador por San Luis y los antecedentes de nuestro régimen federal.

Lo que hay, es que nos encontramos con una de las deficiencias, que la vida ha hecho perceptible, de nuestra organización institucional y de nuestro federalismo.

¿Qué diría el señor ministro de Hacienda, a propósito de lo que acabo de expresar, de que las provincias no pueden dictar una legislación bancaria? ¿Qué diría si las provincias, en uso de la facultad que les acuerda el artículo 107 de la Constitución, de celebrar tratados parciales con fines de administración de justicia, de intereses económicos, de trabajos de

beneficio común, convinieran en realizar una legislación de carácter bancario? Constitucionalmente, sería inobjetable. Pero también es exacto que eso no ha de ocurrir porque los intereses económicos, y esto que yo he llamado la ley de la vida, son superiores a las prescripciones, muchas veces muertas antes de nacer, de los textos constitucionales.

De tal manera, señor presidente, que para no convertir esta discusión, en una bizantina, creo que podremos llegar a un acuerdo sobre la fórmula que salvará los escrúpulos constitucionales y el derecho teórico de las provincias a establecer bancos que nunca establecerán.

**Sr. Arenas.** — Pido la palabra.

Después de este cambio de ideas, y aprovechando las últimas palabras del señor senador por Buenos Aires, me voy a permitir proponer una fórmula para zanjar esta cuestión, agregando al artículo 1º de la ley de bancos, el siguiente párrafo final: «La autorización del Poder Ejecutivo nacional no será necesaria en los casos de bancos oficiales de las provincias».

Si fuera aceptado este agregado y los demás miembros de la comisión estuvieran de acuerdo, podría leerse y votarse.

**Sr. Presidente.** — Se va a leer por Secretaría el agregado propuesto como último párrafo del artículo 1º.

—Así se hace.

**Sr. Presidente.** — Se va a votar.

—Se vota el artículo 1º, con el agregado propuesto, y resulta afirmativa.

—Se leen y aprueban, sin observación, los artículos 2º a 18.

—Se lee el artículo 19.

**Sr. Sánchez Sorondo.** — Pido la palabra.

Aquí se ha deslizado, señor presidente, un pequeño error de imprenta. Debe decir «y la reincidencia en la infracción» en lugar de «y la reincidencia de la infracción».

**Sr. Arenas.** — Es exacto, señor senador.

**Sr. Ministro de Hacienda.** — Así es.

**Sr. Presidente.** — Queda aprobado con la modificación propuesta.

—Se leen y aprueban, sin observación, los artículos 20 a 22, inclusive.

Enero 31 de 1935

CAMARA DE SENADORES

78ª Reunión. Cont. de la 15ª sesión ext.

**Sr. Presidente.** — Queda aprobado el proyecto.

**Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias**

—Se leen y se aprueban, sin observación, los artículos 1º, 2º y 3º del proyecto sobre Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias.

—Se lee el artículo 4º.

**Sr. Arenas.** — Pido la palabra.

El segundo párrafo de este artículo 4º dispone que los bancos «deberán garantizar al Instituto Movilizador el pago total de los créditos que transfiriesen al mismo», etcétera.

La palabra «garantir» al Instituto Movilizador los créditos que éste adquiera, a las resultas de la liquidación de los mismos, ha motivado algunas observaciones de los bancos que han decidido a la comisión a proponer la sustitución de la palabra «garantir», que tiene una acepción jurídica limitada, por la palabra «asegurar»; vale decir, que el segundo párrafo quedaría así: «Los bancos deberán asegurar al Instituto Movilizador», a título de que no se entienda que es una garantía real la que exige el artículo, sino las seguridades necesarias para el reembolso de lo que pudiera corresponder al final de la liquidación.

Es claro que con esta palabra, que da un concepto más amplio, el Instituto Movilizador, según los casos, exigirá una garantía real u otra clase de seguridades, como podrá ser una caución, etcétera.

Es por estas razones, señor presidente, que la comisión propone el cambio de la palabra «garantir» por «asegurar», en este segundo párrafo.

**Sr. Presidente.** — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la modificación propuesta por el señor miembro informante de la comisión.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Sin observación, se leen y aprueban los artículos 5º al 21, inclusive.

**Sr. Presidente.** — Queda aprobado el proyecto.

**Modificación de la ley orgánica del Banco de la Nación Argentina**

—Sin observación, se aprueban los artículos 1º al 8º, inclusive, del proyecto modificando la ley orgánica del Banco de la Nación Argentina.

**Sr. Presidente.** — Queda sancionado.

**Modificación a la ley orgánica del Banco Hipotecario Nacional**

**Sr. Patrón Costas.** — Desearía hacer una pregunta al señor ministro de Hacienda. ¿En qué situación quedan, después de sancionadas estas leyes modificando la carta orgánica del Banco de la Nación y la del Banco Hipotecario Nacional, los directorios actuales de esos establecimientos?

**Sr. Ministro de Hacienda.** — Quedan en función los actuales directores.

—Se leen y aprueban, sin observación, los artículos 1º al 4º del proyecto modificando la ley orgánica del Banco Hipotecario Nacional.

**Sr. Presidente.** — Queda sancionado.

**Ley de organización**

—Se lee y aprueba, sin observación, el artículo 1º de la ley de organización.

**Sr. Arenas.** — Pido la palabra.

Solicito que se autorice a la Presidencia para que al comunicarse estos proyectos a la Cámara de Diputados, se llenen los claros que figuran en este artículo 1º, con referencia a los números de las leyes.

**Sr. Ministro de Hacienda.** — Los claros habrá que llenarlos después que estén sancionados los proyectos por la Cámara de Diputados.

**Sr. Arenas.** — Entonces habrá que arbitrar la forma a fin de que al comunicarse al Poder Ejecutivo se proceda a llenar esos claros.

**Sr. Ministro de Hacienda.** — Como la observación que hace el señor senador por Mendoza podría dar motivo a que los proyectos volvieran de nuevo a esta Cámara en revisión a fin de que se le ponga el correspondiente número, o se suprime el paréntesis, o se pone un artículo al final que autorice al gobierno como se ha hecho en alguna otra oportunidad, porque sería el colmo que viniera en última revisión para ponerle el número. Se podría suprimir.

**Sr. Sánchez Sorondo.** — La dificultad se salvaría estableciendo un artículo como existe en la ley de presupuesto, autorizando al Poder Ejecutivo a poner la numeración.

**Sr. Ministro de Hacienda.** — Muy bien.



**Sr. Presidente.** — Se considerará al final, el artículo que propone el señor senador.

—Se leen y aprueban, sin observación, los artículos 2º y 3º.

—Se lee el artículo 4º.

**Sr. Arenas.** — Pido la palabra.

Se dice en este artículo: «...el fondo de beneficios de cambios (acuerdo general de ministros del 28 de Noviembre de 1933) y el fondo de divisas extranjeras (artículo 37 de la ley de presupuesto vigente)...» Habría que corregir esto último, porque después de la sanción, el artículo 37 de la ley de presupuesto vigente, ha pasado a ser el 43.

**Sr. Presidente.** — Si hay asentimiento, se hará la corrección en la forma que indica el señor senador, miembro informante de la comisión.

—Se vota y aprueba el artículo 4º.

**Sr. Sánchez Sorondo.** — Como lo anuncié el miembro informante de la comisión y lo recordó el señor ministro de Hacienda, me propongo someter a consideración del Senado, un artículo que contemple la situación de los deudores de obligaciones estipuladas en pesos oro moneda nacional para evitar interpretaciones que pudieran tener un sentido contrario a los derechos, que esta clase especial de deudores puede alegar, en esta oportunidad, al amparo de las leyes vigentes.

Hecha la transferencia del oro de la Caja de Conversión al Banco Central, que autoriza el artículo 4º, por la equivalencia que el Poder Ejecutivo fije, podría suscitarse la duda de que los deudores de obligaciones a pesos oro moneda nacional, tuviesen que sujetarse en el pago de ellas al tipo de equivalencia que el Poder Ejecutivo resuelva fijar al oro de la Caja.

No es esa la intención de la ley ni el espíritu con que ella ha sido redactada, de acuerdo con declaraciones categóricas que hemos leído primero en reportajes hechos al señor ministro de Hacienda y escuchado después en la sesión de ayer.

Para evitar en lo posible cualquier interpretación interesada, someto al Senado un artículo que no tiene más alcance que el de fijar la situación actual de dicha clase de deudores, frente a las variaciones de hecho que esta transferencia pudiera ocasionar. El artículo

lo he redactado casi tomando las palabras textuales que pronunció ayer el señor ministro de Hacienda, y sería el siguiente: «Las obligaciones estipuladas en pesos oro sellado, que hasta hoy pueden pagarse a \$ 2,27 papel por peso oro, continuarán pagándose en igual forma».

**Sr. Ministro de Hacienda.** — Pido la palabra.

En la sesión de ayer creo que dije literalmente las palabras que ha recogido como artículo el señor senador por Buenos Aires.

Entiendo que la sanción de esta ley no modifica en lo más mínimo la situación legal de los deudores de pesos oro.

Obligaciones a oro hay de tres clases distintas, aunque muchas veces no se perciben bien. Hay obligaciones a oro contratadas con designación de moneda especial, que, por nuestras leyes, deben pagarse en la moneda especial estipulada. Hay obligaciones en pesos oro que también comportan la designación, por las características del contrato, de una moneda especial; y hay obligaciones contraídas en pesos oro en los que se usa ese término como una simple expresión monetaria, que no importe sino algo más del doble, exactamente, 2,27 pesos papel.

Respecto a las obligaciones en moneda extranjera, es evidente que la sanción de esta ley no las toca en lo más mínimo. En cuanto a las obligaciones en pesos oro, que por las peculiaridades de los contratos resulten también una clase especificada de moneda especial, se aplicarán también las leyes comunes sobre la forma como esas obligaciones deben cumplirse. El tercer grupo de obligaciones, las obligaciones contraídas en pesos oro, como simple denominación, vieiosa o no, de 2,27 papel, no se altera en lo más mínimo por la sanción de la ley, por una razón que resulta harto clara.

Si hoy 1,6 gramos de oro, no cuesta 2,27 pesos papel, sino 5 pesos, y sin embargo las simples obligaciones a pesos oro, sin moneda especial determinada se pagan a 2,27, no veo por qué mañana, cuando se haga una operación en gran escala entre el Banco Central y la Caja de Conversión, transfiriendo oro, al precio de 1,6 gramos de oro por 4 ó 5 pesos, va a resultar alterada esta situación.

Ayer dije que si existe un valor legal del peso, distinto de su valor en el mercado, esa situación legal no podría modificarse sino por una ley, y mientras ella no se dicte, la situación no se modifica.

Si no existe un valor legal del oro y las obligaciones se deben cumplir de acuerdo con el



valor que tiene en plaza el oro, es evidente que tampoco se modifica esta situación por el hecho de que hagamos una operación de enajenación de oro al tipo de plaza. Me parece que la situación es bastante clara.

Yo les recordaría a los señores senadores algo que sin duda ellos conocen mejor que yo, pero pueden no tenerlo fresco en el recuerdo: la denominación «peso oro» no es en nuestras leyes una designación de moneda especial, si ello no resulta del contexto de contratos u obligaciones. Una ley nacional lo dice categóricamente. Se recordará que al establecerse la in-conversión en el año 85, se dictó la ley 1.734, que tiene un artículo que dice lo siguiente: «Las obligaciones anteriores contraídas a moneda nacional oro, podrán ser canceladas en billetes de curso legal por su valor escrito», etcétera. «Quedan exceptuados aquellos contratos contraídos con designación de moneda especial».

De manera que expresamente la legislación dice allí que la simple expresión «peso oro» no es una designación de moneda especial y que se necesita saber qué hay en el contrato para saber cómo debe pagarse.

Por lo demás, rige en este momento una ley del Congreso, dictada el año 14, que establece que no se pueden ejecutar las obligaciones a oro. En este momento habrá cuestiones, que se solucionarán no sé en qué forma, respecto al derecho que tengan los deudores de consignar o pagar en papel obligaciones a oro. Pero parece indiscutible que está amparado por una moratoria especial el deudor de oro, que no puede ser compelido al pago de la obligación si el acreedor no se aviene a recibir \$ 2,27 papel por cada una de esas cosas que se llama peso oro, empleando el término en sentido equívoco.

Esa es la situación y por eso el gobierno ha creído que no era necesario proyectar medida alguna al respecto.

No obstante esa circunstancia, el artículo propuesto por el señor senador por Buenos Aires no puede ser objetado por mí, porque lo que hace es decir expresamente en un texto legal lo que yo he dicho como simple expresión de opinión sobre la doctrina que rige. Ahora, el valor legal que tenga esa disposición, correrá la suerte de toda la doctrina misma. Si ella es compartida por los tribunales, con la disposición o sin ella, verosimilmente la solución sería la indicada; si la doctrina no fuera compartida por los tribunales, hay cierta verosimilitud en la sospecha de que, aun

con el agregado que propone el señor senador por Buenos Aires, la solución sería otra.

Eso, repito, señor presidente, no me lleva en ninguna forma a impugnar ni a oponerme al agregado que propone el señor senador por Buenos Aires, que no hace sino dar expresión legal a lo que yo creo que es hoy el derecho argentino vigente.

**Sr. Sánchez Sorondo.** — Pido la palabra.

Debo decir, señor presidente, que en realidad no me satisface mucho la manifestación de acuerdo que acaba de hacer el señor ministro de Hacienda, puesto que ella vendría a colocar este agregado como una cosa perfectamente inútil, lo que no es, en mi concepto, su verdadero aleanee.

Efectivamente, hay diferentes clases de obligaciones a oro: hay las obligaciones a oro en moneda extranjera -- en libras, dólares o francos --; hay las obligaciones a oro que se han referido a una determinada cantidad de metal y a una determinada clase de moneda, y hay las obligaciones, bastante numerosas en el país, de pesos oro moneda nacional en las que no se ha tenido cuidado de especificar otra relación que la legal de \$ 2,27 papel por peso oro.

Por eso, insertada esta cláusula en la ley, hará obligatorio a los tribunales el respeto de esa disposición, y disipará hasta la tentativa de equívoco, que si no existiera esta cláusula pudiera introducirse por el hecho de haber el Poder Ejecutivo, en mérito de una autorización conferida por la ley, realizado la revaluación del oro.

**Sr. Ministro de Hacienda.** — Acepto el agregado propuesto por el señor senador.

**Sr. Sánchez Sorondo.** — Contra esa posible argumentación de los deudores en pesos oro, en moneda nacional, es que va dirigido este artículo como una defensa...

**Sr. Ministro de Hacienda.** — Sí, señor senador. Percibo claro su propósito. El señor senador desea que aparezca como acto legislativo, es decir, como incorporado a la ley, un precepto que diga: Conste que el hecho de que autorizemos al gobierno a traspasar el oro de la Caja de Conversión al Banco Central, a un precio distinto de 2.27 pesos por 1,6 gramos de oro, no significa que alteremos las relaciones contractuales que hoy se pagan a 2,27...

**Sr. Sánchez Sorondo.** — Exactamente.

**Sr. Ministro de Hacienda.** — Estoy conforme con el agregado.

**Sr. Sánchez Sorondo.** — Tanto más, señor

presidente, cuanto que si no se dictara esta medida, resultaría esto: que los únicos que estarían amenazados de pagar, en realidad, esta creación del Banco Central y esta transferencia del oro revaluado por el Poder Ejecutivo, serían los inocentes deudores a pesos oro moneda nacional.

Y es recogiendo algunas de las elocuentes expresiones del señor ministro de Hacienda vertidas en la sesión de ayer, cuando decía que era necesario defender a los deudores, que yo propongo, mirando por esos deudores, esta cláusula que acepta la comisión.

**Sr. Arenas.** — Pido la palabra.

Al informar en general el proyecto, ya anunciamos al Honorable Senado que el señor senador doctor Sánchez Sorondo propondría el artículo nuevo que acaba de fundar y que la comisión aceptaba en los términos que se han hecho conocer.

Nada más.

**Sr. Sánchez Sorondo.** — En vez de ser como artículo nuevo que podría alterar la numeración de la ley, podría ir este agregado como último apartado.

**Sr. Ministro de Hacienda.** — Está bien como último apartado.

**Sr. Presidente.** — Se va a leer por Secretaría el agregado que va como último apartado del artículo 4º.

**Sr. Secretario (Figueroa).** — *(Leyendo):* «Las obligaciones estipuladas en pesos oro sellado que hasta hoy pueden pagarse a 2,27 papel por peso oro, continuarán pagándose en igual forma.»

**Sr. Presidente.** — Se va a votar en esa forma.

—Se vota el agregado propuesto como último apartado del artículo 4º y se aprueba.

—Se leen y aprueban, sin observación, desde los artículos 5º al 7º, inclusive.

—Se lee el artículo 8º.

**Sr. Arenas.** — Pido la palabra.

En este artículo, señor presidente, debe salvarse un error de impresión. Donde dice: «fondo de conservación» debe decir «fondo de conversión».

**Sr. Presidente.** — Será salvado el error, señor senador.

—Se aprueba el artículo 8º.

—Se leen y aprueban, sin observación, los artículos 9º a 15.

—Se lee el artículo 16.

**Sr. Arenas.** — Pido la palabra.

Como en el caso anterior, debe substituirse el número del artículo 37 de la ley de presupuesto vigente por el número 43.

—Asentimiento.

**Sr. Presidente.** — Habiendo asentimiento, se hará la corrección.

—Se aprueba el artículo 16.

—Sin observación, se leen y aprueban los artículos 17 al 22, inclusive.

—Se lee el artículo 23.

**Sr. Arenas.** — Pido la palabra.

Como artículo 23, la comisión propone el siguiente, para salvar la omisión de los números de las leyes que se citan y que todavía no se pueden determinar. Pido al señor secretario se sirva leerlo.

**Sr. Secretario (Figueroa).** — *(Leyendo):* «Autorízase al Poder Ejecutivo, al promulgar la presente ley, a poner los números que correspondan a las leyes citadas en los artículos 1º, 6º, 7º y 12.»

**Sr. Sánchez Sorondo.** — Acaso podría solucionarse esta pequeña cuestión, suprimiendo los paréntesis del artículo 4º.

**Sr. Ministro de Hacienda.** — Son innumerables los artículos votados y que habría que corregir. Podría decirse: «Autorízase al Poder Ejecutivo a señalar en cada caso, el número de las leyes que corresponda».

**Sr. Arenas.** — Precisamente, es lo que dice el artículo que había propuesto y que he modificado en la forma que el señor secretario se servirá dar cuenta.

**Sr. Secretario (Figueroa).** — *(Leyendo):* «Artículo 23.—Autorízase al Poder Ejecutivo, al

Enero 31 de 1935

CAMARA DE SENADORES

78ª Reunión. Cont. de la 15ª sesión ext.

promulgar la presente ley, a señalar en cada caso, el número de las leyes citadas».

**Sr. Presidente.** — Se va a votar el artículo propuesto por el señor miembro informante de la comisión.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Sin observación, se aprueban los artículos 23 que pasa a ser 24, y 24 que pasa a ser 25, del despacho de la comisión.

**Sr. Presidente.** — Queda aprobado el proyecto.

No habiendo más asuntos al orden del día, queda levantada la sesión.

—Era la hora 18 y 10 minutos.

RAMÓN COLUMBA,  
Director de Taquígrafos.

  
H. Cámara de Diputados de la Nación  
Secretaría Parlamentaria  
Dirección de Información Parlamentaria